

120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

OBJETO: CONCEPTUAR SOBRE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-VALLE DEL CAUCA, CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN ESE MUNICIPIO

Con el fin de emitir concepto ante la contratación derivada de calamidad pública, me permito citar los artículos 1 y 4 del Acto legislativo No 04 del 18 de septiembre de 2019, los cuales establecen:

Artículo 1 “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (...)

(...) La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales.

Artículo 4. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la República”.

Consecuentemente, en el numeral 5 del artículo 4 y en el artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, se define la calamidad pública como:

“El resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción”.

Así mismo, la aludida Ley 1523 de 2012, define específicamente el término desastre, en la forma que debe ser comprendido para el desarrollo de la materia que regula la norma, así:

“Artículo 55. Desastre. Para los efectos de la presente ley, se entiende por desastre el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.”

Por su parte, el artículo 66 de la norma en comento, estableció las medidas especiales de contratación para los contratos celebrados en pro de la ejecución de actividades de respuesta y reactivación de las zonas afectadas por la calamidad pública, y así mismo dispuso que tales contratos deben ser sometidos al control fiscal dispuesto para las declaratorias de urgencia manifiesta en los términos de los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, tal como se cita:

“Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen”.

Ahora sobre la figura de la Urgencia Manifiesta, en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, Se concibe como:

“Artículo 42º.- De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.

La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.

Parágrafo.- Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.”

Así mismo el artículo 43 de la precitada norma, impuso el deber a las autoridades administrativas de enviar el expediente contractual abierto con ocasión de la urgencia manifiesta y los actos administrativos que dieron lugar a ello, a los entes de control fiscal:

“Art. 43 Ley 80 de 1993. Del Control a la Urgencia Manifiesta. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas y de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración.

Si fuere procedente dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia”.

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, estableció las modalidades de selección de contratistas, dentro de las cuales contempló la contratación directa, determinando los casos en que procede tal modalidad:

“Artículo 2º. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:

(...)

4. Contratación directa. *La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:*

a) Urgencia manifiesta;

b) Contratación de empréstitos;

(...)



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

Parágrafo 1°. *La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar.
(...)*

Cabe aclarar que el uso indebido de la contratación de Urgencia manifiesta puede llegar a constituirse gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal, conforme lo establecido en el artículo 126 del Decreto 403 de 2020

Por consiguiente, se procede a realizar el estudio de la situación que conllevó a la contratación que se relaciona en este documento.

I. ANTECEDENTES

1. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del municipio de Candelaria - Valle, como consta en acta 05 de reunión extraordinaria realizada el 25 de marzo de 2020, sesionó a efectos de tratar la problemática la situación en la que vive el Municipio con ocasión a la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta aspectos como el Puesto de Mando Unificado, la necesidad de declarar la calamidad pública en el Municipio, el seguimiento que le realizan las autoridades a las empresas para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, la necesidad de fortalecer la red de transporte Hospitalario puesto que cuentan con tres (3) ambulancias para cubrir de ser necesario, la movilidad de los 94.211 habitantes del Municipio.

De igual forma, se construyen planes de atención junto con la secretaria de salud, una posible habilitación de sala UCI, con el fin de atender casos, y la dotación de centros de atención a pacientes que sean positivos para COVID-19.

2. Teniendo en cuenta los decretos emitidos por la Presidencia de la República, en el sentido del aislamiento preventivo obligatorio, y los efectos en la economía del Municipio, en consecuencia, solicitan la autorización para la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta, motivo por el cual el Alcalde Municipal expidió los decretos N°084 y N°087 del 20 y 25 de marzo de 2020 respectivamente **MEDIANTE LOS CUALES DECRETA LA URGENCIA MANIFIESTA Y CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-VALLE DEL CAUCA respectivamente**, resolviendo dar aplicación al régimen normativo especial para situaciones de calamidad pública contemplado en el capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 y de urgencia manifiesta en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993.
3. El objetivo del Plan de Acción, de acuerdo a los efectos directos que se esperan tras su implementación, se basa en la reducción de la probabilidad de contagio por COVID-19 y la disminución del impacto negativo causado a las familias vulnerables del municipio de Candelaria por la medida nacional de confinamiento. De igual forma, los costos aproximados planeados ascienden a \$4.091.595.101, en donde \$3.501.082.369 serán recursos propios y \$77.600.000 serán donaciones por parte de empresas privadas
4. Con fundamento en la situación calamitosa, el Municipio reportó a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, trece (13) contratos suscritos por valor total de \$1.623.252.580,00, cuyas características generales son como se exponen a continuación:



120.08.03

PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)

Nº Contrato	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Valor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Contrato No. 203-13-11-001 de 2020	Prestación de Servicios	Prestación de servicios de perifoneo y publicidad móvil, para informar de manera masiva a la comunidad de candelaria valle, en el marco de la urgencia manifiesta, por la pandemia Covid - 19	\$ 25.000.000	27/03/2020	15/04/2020
Contrato No. 203-13-11-002 de 2020	Contrato de suministro	Suministro de insumos de asepsia para el personal de apoyo, organismos de socorro, fuerzas de seguridad y demás personal de la administración municipal, con ocasión de la urgencia manifiesta, decretada para conjurar la crisis por el contagio del coronavirus-covid-19.	\$ 88.847.732	27/03/2020	15/04/2020
Contrato No. 203-13-11-007 de 2020	Prestación de Servicios	Prestación de servicios para el diseño, elaboración y entrega de piezas comunicativas e informativas para la comunidad en el marco de la urgencia manifiesta por la pandemia coronavirus covid-19.	\$ 40.000.000	27/03/2020	15/04/2020
Contrato No. 203-13-11-009 de 2020	Contrato de Arrendamiento	Mediante el presente contrato, el arrendador concede al arrendatario el uso y goce del inmueble ubicado en la carrera 7 n° 10-29 10-31, jurisdicción del municipio candelaria valle, para centro de hospitalización y tratamiento de personas contagiadas del coronavirus (covid-19) del municipio de candelaria en el marco de la urgencia manifiesta, por la pandemia covid — 19	\$ 33.707.868	8/04/2020	8/10/2020
Contrato No. 203-13-11-013 de 2020	Contrato de suministro	contrato de suministro no. 203-13-11-013 insumos de asepsia para el personal de apoyo, organismos de socorro, fuerzas de seguridad y demás personal de la administración municipal, con ocasión de la urgencia manifiesta, decretada para conjurar la crisis por el contagio del coronavirus - covid19	\$ 74.723.289	14/05/2020	29/05/2020
Contrato N° 203-13-11-004 de 2020	Prestación de Servicios	Prestación de servicios de alimentación para atender a los organismos de socorro, fuerzas de seguridad y demás personal de la administración municipal con ocasión de la urgencia manifiesta, decretada para conjurar la crisis por el contagio del coronavirus covid 19.	\$ 60.000.000	27/03/2020	15/04/2020
Contrato N° 203-13-11-005 de 2020	Contrato de suministro	Prestación de servicios de suministro de ayudas alimentarias (remesas) para la población de escasos recursos y trabajadores informales del municipio de candelaria en ocasión de la urgencia manifiesta por coronavirus covid 19.	\$ 130.000.000	27/03/2020	15/04/2020
Contrato N° 203-13-11-008 de 2020	Contrato de prestación de servicio de transporte	Prestación de servicios de trasporte para distribuir las ayudas alimentarias y otros elementos en todo el municipio de candelaria en el marco de la urgencia manifiesta por l la pandemia covid 19.	\$ 30.000.000	6/06/2020	15/04/2020
Contrato N° 203-13-11-010 de 2020	Contrato de suministro	Prestación de servicios de suministro de ayudas alimentarias (remesas) para la población de escasos recursos y trabajadores informales del municipio de candelaria en ocasión de la urgencia manifiesta por coronavirus covid 19.	\$ 200.000.000	20/04/2020	4/05/2020
Contrato N° 203-13-11-	Contrato de prestación de servicio de	prestación de servicios de limpieza y desinfección de las instalaciones sedes administrativas de la alcaldía municipal y	\$ 88.373.691	27/03/2020	15/04/2020

120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

Nº Contrato	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Valor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización
006 de 2020	Limpieza y desinfección	áreas públicas del municipio de candelaria en el marco de la urgencia manifiesta por la pandemia covid 19			
Contrato N° 203-13-11-003 de 2020	Contrato de suministro	Prestación de servicios de suministro de ayudas alimentarias (remesas) para la población de escasos recursos y trabajadores informales del municipio de candelaria en ocasión de la urgencia manifiesta por coronavirus covid 19.	\$ 300.000.000	27/03/2020	15/04/2020
Contrato N° 203-13-11-011 de 2020	Contrato de suministro	Prestación de servicios de suministro de ayudas alimentarias (remesas) para la población de escasos recursos y trabajadores informales del municipio de candelaria en ocasión de la urgencia manifiesta por coronavirus covid 19.	\$ 300.000.000	20/04/2020	4/05/2020
Contrato N° 203-13-11-012 de 2020	Contrato de suministro	Prestación de servicios de suministro de ayudas alimentarias (remesas) para la población de escasos recursos y trabajadores informales del municipio de candelaria en ocasión de la urgencia manifiesta por coronavirus covid 19.	\$ 200.000.000	22/04/2020	6/05/2020
Total			\$1.623.252.580		

5. Por lo anterior, en el término de dos (2) meses la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir el pronunciamiento a que haya lugar de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 y artículo 43 de la ley 80 de 1993.

II. DE LOS HECHOS Y CIRCUNTANCIAS QUE MOTIVARON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA.

Respecto de los actos administrativos mediante los cuales se declaró la calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta, en ellos se determinó su motivación bajo argumentos que contemplan las circunstancias y hechos que dieron lugar a la calamidad y al uso de la figura de urgencia manifiesta, en los siguientes términos:

“(…) CONSIDERANDOS

(…)

j) Que ante la situación del nuevo Coronavirus (COVID-19), desde el pasado 30 de enero, se declaró esta epidemia como una Emergencia en Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización: Mundial de la Salud, por lo que este municipio ha venido implementando medidas preventivas para enfrentar su llegada en las fases de prevención y contención en aras de mantener la situación en salud controlada.

k) Que el nuevo virus tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que: los mecanismos de transmisión son: 1) Gotas respiratorias al toser y estornudar de la persona contagiada a la persona sana y 2) contacto directo con superficies contaminadas. Se ha establecido que tiene una mayor velocidad de contagio y la sintomatología suele ser inespecífica, con fiebre, escalofríos y dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la muerte.

1) Que en coherencia con la situación mundial reportada, la transmisión comunitaria detectada en diferentes países como la República Popular China, Italia, España y Francia y con ocasión del constante flujo de viajeros hacia los demás países del mundo y teniendo en cuenta que se transmite de persona a persona, ha traspasado las fronteras geográficas a través de pasajeros infectados y entonces han declarado la medida preventiva de las restricciones de actividades que aglutinen a muchas personas como el cierre de los centros educativos, eventos



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

deportivos y la cancelación de las reuniones masivas, hasta llegar a la declaración de la medida preventiva de cuarentena de la población en general.

- m) *Que el 9 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó, sobre el COVID-19, que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al escenario en que se encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas con un objetivo común a todos los países: Detener la transmisión y prevenir la propagación del virus para lo cual los países sin casos o con casos esporádicos y aquellos con casos múltiples o diversos deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos individuales y hacer seguimiento a los contagiados.*
- n) *Que la OMS declaró el 11 de marzo de esta anualidad que la epidemia por el coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, y a través de comunicado de prensa anunció que, a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos los continentes, existen casos de propagación y contagio y que a partir de que el virus COVID-19 ha sido detectado, se han presentado más de 12.000 fallecimientos, cifra que va en incremento progresivo a través de los reportes diarios, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.*
- o) *Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 5o que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como una de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.*
- p) *Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en el parágrafo 1 de su artículo 2.8.8.1.4.3 indica que el Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, "sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada."*
- q) *Que con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes del territorio colombiano, así como brindar protección especial a los niños, niñas y personas mayores, se hizo necesario que el Ministerio de Salud y Protección social dictara la Resolución 0380 del 10 de marzo de 2020 para adoptar medidas preventivas sanitarias por causa del coronavirus COVID-19; la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus; la Resolución 0444 del 16 de marzo de 2020, por la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia necesaria causada por el coronavirus COVID-19.*
- r) *Que el Gobierno Nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria en el territorio colombiano y con el propósito de proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como una de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho, expidió una serie de normas y dentro de ellas el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional; el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19; el Decreto 438 del 19 de marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020; el Decreto 439 del 20 de marzo de 2020, por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea; el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19; el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, en donde establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena de todas las personas habitantes de la República de Colombia durante 19 días.*
- m) *Que en el Departamento del Valle del Cauca, de igual manera de han tomado medidas de protección, control y contención de la emergencia sanitaria en el territorio departamental frente a los casos presentados de personas*



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

afectadas por el COVID-19 y para prevenir el incremento del contagio, es así como se han expedido los Decretos 1-3-0666 del 12 de marzo de 2020, el Decreto 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020, por el cual se declaró la calamidad pública en el Departamento ante la afectación a la población, el Decreto 1-3-0676 del 16 de marzo de 2020 y el Decreto 1-3-0691 del 18 de marzo de 2020.

- n) *Que el artículo 314 de la Constitución Política en su inciso 1o establece que en cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio y el artículo 315 dispone dentro de las atribuciones de los Alcaldes las siguientes: "1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las Ordenanzas, y los Acuerdos del Concejo. 1 2. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la Prestación de los servicios a su cargo.*
- o) *Que como una acción urgente para prevenir los efectos que se pudieran causar con la pandemia global del Coronavirus (COVID-19) que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se hizo necesario recurrir a la competencia extraordinaria de policía con el objeto de garantizar la vida y la salud de los habitantes del municipio de Candelaria Valle, para lo cual se expidió el Decreto 082 del 17 de marzo de 2020, "Por medio del cual se dictan medidas de protección frente al coronavirus covid-19 en el municipio de Candelaria Valle y se dictan otras disposiciones".*
- p) *Que en aras de dar una respuesta eficiente y oportuna para prevenir, controlar, contener y mitigar el impacto de la pandemia de Coronavirus (COVID-19) en el municipio de Candelaria Valle, es necesario adelantar acciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica, organización de la red de servicios, desarrollo de medidas preventivas y de control, aspectos de comunicación, educación a la comunidad y capacitación a todo el personal de Salud y Gestión del Riesgo que opera en el municipio.*

Que la Ley 1523 de 2012 establece en su capítulo VI las declaratorias de desastre, calamidad pública y normalidad y en el artículo 58 S!3 establece que para los efectos de dicha norma, "se entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción".

- s) *Que el artículo 59 de la misma normatividad fija los criterios para que las autoridades políticas declaren la situación de desastre o calamidad:*
- 1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas.*
 - 2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica.*
 - 3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres.*
 - 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse.*
 - 5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia.*
 - 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.*
 - 7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.*
- x) *Que la Corte Constitucional respecto de la declaratoria de calamidad pública en la sentencia C-466 de 2017, con ponencia del magistrado Dr. Carlos Bernal Pulido señaló: "La calamidad pública alude, entonces, a un evento o episodio traumático, derivado de causas naturales o técnicas, que altera gravemente el orden económico, social o ecológico, y que ocurre de manera imprevista y sobreviniente". Ha señalado además que*



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

"Jos acontecimientos, no solo deben tener una entidad propia de alcances e intensidad traumáticas, que logren conmocionar o trastocar el orden económico, social o ecológico, lo cual caracteriza su gravedad, sino que, Además, deben constituir una ocurrencia imprevista, y por ello diferente a los que se producen regular y cotidianamente, esto es, sobrevenientes a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la actividad de la sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las cuales debe dar respuesta el Estado mediante la utilización de sus competencias normales". En tales términos, la Corte ha reconocido que la calamidad pública puede tener una causa natural, por ejemplo, temblores o terremotos, avalanchas, desbordamientos de ríos, inundaciones, etc., o puede tener una causa técnica como por ejemplo "accidentes mayores tecnológicos".

Que el Municipio de Candelaria Valle, mediante el Decreto municipal 091 del 31 de mayo de 2012, conformó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo De Desastres y de conformidad con lo previsto en el acto administrativo en mención el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene también como objeto articular las políticas, estructuras, relaciones funcionales, métodos, recursos, procesos y procedimientos de las entidades públicas y privadas y las comunidades en el ámbito de sus competencias, con el propósito común de generar sinergia en las actuaciones que integran la gestión de riesgos y desastres en el municipio de Candelaria Valle.

Z) Que el día 25 de marzo de 2020, en sesión del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Candelaria Valle, al analizar la situación que se viene presentando en todo el territorio colombiano, en el crecimiento diario de los contagiados y en las muertes ya presentadas en la ciudad de Cali por la gravedad que genera en algunas personas, la velocidad en el riesgo de contagio del COVID- 19 y atendiendo los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública establecidos en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, el Consejo mediante el acta número 5 emitió concepto favorable, atendiendo la inminencia de calamidad pública que puede generarse en esta municipalidad.

(...)"

El acto administrativo N°069 de marzo 26 de 2020 "Por medio del cual se declaró la Urgencia Manifiesta", con base entre otras de las siguientes consideraciones:

(...)

- n) Que para prevenir, controlar y contener los efectos que podrían generarse con la pandemia del coronavirus COVID-19 en el municipio de Candelaria Valle, esta entidad territorial expidió el Decreto 082 del 17 de marzo de 2020.*
- o) Que el Estatuto General de la Contratación Pública se encuentra compuesto por reglas cuyo objetivo principal son el alcance de la contratación de los bienes, servicios y obras que se requieran para el cumplimiento de los fines del Estado y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, dentro de los parámetros que permiten adelantar un proceso de selección enmarcada en los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como en el deber de selección objetiva.*
- p) Que aún con la observancia de tales principios y deberes, la normatividad de la contratación pública contiene instrumentos de respuesta rápida ante la ocurrencia de eventos o circunstancias que no pueden dar espera, respecto de la necesidad de emprender acciones inmediatas tendientes a conjurar graves afectaciones que puedan generarse con la situación actual de crecimiento del número de afectados por el coronavirus COVID-19, por razones puramente formales como el agotamiento de etapas precontractual y contractual, hasta la extensión y cumplimiento de todos los procedimientos y documentos de la contratación pública. Es así que para la ejecución de acciones y actividades que han de realizarse de manera urgente e inmediata, no podría negarse el uso del instrumento como es la urgencia manifiesta, porque sería negarle a la comunidad Candelaria el legítimo derecho a fortalecer las acciones de la administración pública municipal en el manejo integral de la prevención, contención, atención, vigilancia y control, comunicación, capacitación y formación para garantizar el derecho fundamental a la salud en el territorio municipal.*
- q) Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, establece: "Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o*



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a /os procedimientos de selección o concurso públicos .

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. Parágrafo. Con el fin de atender /as necesidades y /os gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer /os traslados presupuesta/es internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. “

- r) *Que el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 34425 de 2011, determina que "la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en /os cuales puede suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el*
- s) *respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones , puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño"*
- t) *Que la Procuraduría General de la Nación argumentó los elementos esenciales de la urgencia manifiesta, establecidos por el Consejo de Estado, en un fallo proferido el 16 de enero de 2018, por la Sala Disciplinaria, con radicación No. 161- 6270 IUS 2013 , "El Consejo de Estado también se pronunció sobre los elementos esenciales de la urgencia manifiesta, como una modalidad de contratación directa y mecanismo excepcional que otorga instrumentos efectivos a las entidades para celebrar contratos necesarios para enfrentar situaciones de crisis cuando es imposible celebrarlos a través de licitación o contratación directa, por no contar con el plazo indispensable para adelantarla:*
 - i) *Necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, ocasionados por los estados de excepción, por la paralización de los servicios públicos, provenientes de situaciones de calamidad, constitutivas de fuerza mayor o desastres u otra circunstancia similar que no dé espera su solución; ii) la obligación de verificar que el objeto del contrato necesita permanencia o que la administración requiere garantizar la continuidad de un servicio que exige suministro de bienes, ejecución de obras o la propia prestación de servicios; iii) es excepcional, por lo que no puede convertirse en una regla general o un instrumento discrecional en manos de autoridades públicas , su aplicación es de derecho estricto por la configuración de las precisas causales establecidas por la ley, no puede ser abusiva y contraria a*
 - u) *los principios de la contratación estatal; iv) debe declararse mediante un acto administrativo motivado en razones ciertas y convincentes que permitan verificar la verdadera necesidad de recurrir a dicho mecanismo, ya que depende de los motivos*
 - v) *de mérito o conveniencia que fueron valorados; y v) tiene un régimen jurídico especial, al ser el único caso en el que se permite el contrato consensual, al*
 - w) *prevalecer el interés general sobre las formalidades, las cuales ceden ante situaciones excepcionales."*
- t) *Que el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 señala en el artículo 7 "Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID- 19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales; adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente.*
- x) *Con el mismo propósito, /as entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta clase de bienes y servicios."*

u) Que mediante reunión sostenida el día 20 de marzo del presente, el señor Alcalde y su Consejo de Gobierno en pleno, después de analizar los hechos y situaciones que vienen ocurriendo en el Mundo y nuestro País, tomo la decisión de Decretar la Urgencia Manifiesta como medio idóneo para responder a la crisis de salubridad que se viene presentando y poder salvaguardar a los habitantes de nuestro territorio.



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

*v) Que en mérito de lo anterior expuesto, se hace necesario declarar la urgencia manifiesta en el municipio de Candelaria Valle, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes en la salud de los habitantes en toda la jurisdicción municipal, que permita adelantar la adquisición de elementos, insumes, bienes y servicios, tendientes a garantizar la efectiva atención en salud a los Candelareños y a fortalecer la prevención, contención y control del contagio del coronavirus COVID-19, además de todas las acciones y actividades que propendan para evitar la propagación de la epidemia en todo el territorio .
(..)."*

**III. DE LOS DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA CON BASE EN LOS CUALES SE
EMITE EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO**

Para el efecto de este concepto, abordaremos los documentos que se allegaron al organismo fiscalizador, sobre los contratos que se ejecutaron con cargo al presupuesto municipal de Candelaria-Valle del Cauca, como aparece glosadas en la correspondiente carpeta a saber, así:

1. Copias de los Decretos N°. 084 del 20 de marzo de 2020 y N° 087 del 25 de marzo de 2020 por los cuales se declaran la Urgencia Manifiesta y la Calamidad Pública respectivamente en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca.
2. Copia del Acta de reunión extraordinaria CMGRD N° 5 de fecha 25 de marzo de 2020.
3. Plan de Acción específico.
4. Plan de Contingencia.
5. Relación de contratación suscrita en razón a la urgencia manifiesta.
6. Copia de once (11) minutas contractuales suscritas en razón a la urgencia manifiesta decretada.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Sea lo primero advertir que este pronunciamiento se hace de manera objetiva, guardando con rigor los principios establecidos en el canon 209 de la Norma Superior, en los cuales se desarrolla y fundamenta la función administrativa, considerando para tal propósito únicamente la prueba documental allegada a la Contraloría Departamental del Valle, consistente en los antecedentes administrativos que dieron origen a la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta por parte del Alcalde Municipal de Candelaria Valle del Cauca y los actos contractuales que para conjurar la misma se celebraron.

Para el efecto se requiere practicar un estudio sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad legal vigente que regula la materia de situaciones de calamidad pública y desastres en Colombia.

Así, se tiene que partiendo del hecho que el Alcalde Municipal de Candelaria procedió a realizar la actividad contractual bajo el sustento de responder a la Calamidad Pública resolvió mediante el Decreto N° 084 del 20 de marzo y 087 del 25 de marzo por los cuales se declaran la Urgencia Manifiesta y la Calamidad Pública respectivamente en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca e invocan la Ley 80 de 1993 como régimen especial para proceder a la práctica de la contratación directa, se hace necesario citar a continuación el articulado respectivo para su análisis:

**"LEY 1523 DE 2012
(Abril 24)**

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

(...)

Artículo 57. Declaratoria de situación de calamidad pública. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de (sic) situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre.

En cuanto a la declaratoria de situación de calamidad pública, el artículo 57 de la norma en comento establece que el Alcalde municipal podrá proferir el decreto que la declara, siempre y cuando cuente con el concepto favorable del CMGRD del municipio requisito que en este caso sí se cumplió; como consta en acta de fecha 25 de marzo de 2020.

Ahora, es importante determinar el cumplimiento del artículo 59 de la norma, respecto a la adopción de los criterios para la declaratoria de la calamidad pública, a saber:

(...)

Artículo 59. Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:

1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas.

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños.

Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica.

3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres.

4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse.

5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia.

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.

7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.

(...)

De acuerdo con el enunciado normativo citado, se tiene que las razones aducidas por el alcalde municipal para declarar la Calamidad Pública, se encuentran justificadas, pues éstas se encaminaron a proteger la salud y vida de los habitantes del municipio de Candelaria.

Que se han expedido alertas nacionales por el Ministerio de Salud y son de público conocimiento y en este momento se encuentra una amenaza a nivel mundial por la pandemia que agobia los cinco continentes incluido el territorio Colombiano y de lo cual no se requieren pruebas.

El Alcalde Municipal de Candelaria **no hizo uso del fondo o por lo menos no enviaron prueba de ello**, para atención de calamidad pública de que trata la Ley 1523 de 2012, y por tal razón invocó la figura de la urgencia manifiesta de que tratan los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 para afectar



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

el sistema de contratación que llevó a cabo con los recursos públicos del presupuesto del municipio lo que se encuentra acorde con la norma, tal como se trata seguidamente.

En este punto considera el Despacho oportuno recordarle a la primera autoridad municipal de Candelaria - Valle, que tal como lo establece la Ley 1523 de 2012, debe crearse el fondo de atención para calamidades públicas, de ésta forma no se afecta directamente el presupuesto del municipio con la actividad contractual, sino el presupuesto autónomo del aludido fondo, conforme lo establecido en el artículo 66 que prescribe:

“Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993”.

De conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, como regla general y expresión del principio de transparencia, la selección del contratista se celebra a través de licitación, Selección Abreviada, concurso de méritos, o mínima cuantía, según sea el caso. No obstante, el mismo cuerpo normativo prevé algunas excepciones que permiten contratar directamente, como en el caso de la urgencia manifiesta¹.

“La Urgencia Manifiesta es una figura precontractual valida de uso extraordinario o excepcional y se refiere básicamente a la necesidad de darle continuidad al servicio o precaver daños a la Administración o a los administrados ante la ocurrencia de eventos imprevistos de tal forma que concurran alguna de las causales previstas en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que dispone que esa figura tiene aplicación en los siguientes casos:

- 1. Cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro.*
- 2. Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción.*
- 3. Cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden situaciones inmediatas.*
- 4. Cuando se trate de situaciones que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección”.*

Ahora bien, las alteraciones de la normalidad que constituyen el régimen de excepción, son únicamente las previstas en la Constitución, a saber:

- Guerra exterior (estado de guerra exterior).
- Grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía (estado de conmoción interna).
- **Perturbaciones graves e inminentes, del orden económico, social y ecológico del país, o hechos que constituyan grave calamidad pública (estado de emergencia).**

Y precisamente en la actualidad en Colombia, el presidente de la República expidió el Decreto N°417 de marzo de 2020 y N°637 del 6 de mayo de 2020 “Por los cuales se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional para atender la pandemia del COVID-19 en el país”.

¹ Artículo 2 Numeral 4 Literal A ley 1150 de 2007



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

Es así y a efectos de emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda se tendrá en cuenta inicialmente que la urgencia manifiesta es un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios con el propósito de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de conflicto o de crisis, son del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública, concurso de méritos es decir cuando la administración no cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas”.

Como bien se colige de la anterior definición, la ley señala unas exigencias específicas a la Administración para proceder a la declaración de la urgencia manifiesta, como son; las circunstancias o hechos excepcionales que le dan origen y la imposibilidad de acudir al mecanismo de la licitación pública o al trámite legal establecido para la contratación porque no cuenta con el plazo indispensable para adelantar el procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.

El artículo 41 de la ley 80 de 1993 literal 3 dispuso:

“En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante”. (subrayas fuera de texto)

En la ley en cita, en el párrafo del Artículo 42 establece:

“PARÁGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.

Es necesario, esgrimir que Artículo 7° del Decreto 440 de 2020, expresa que el hecho que da lugar a la declaratoria de la urgencia se entiende probado, tal como a continuación se observa:

“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente”.

De igual modo, se expresa frente al tema en el Artículo 7° del Decreto 537 de 2020

*“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de Ley 80 1993, se entiende comprobado hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicio, o la ejecución obras en el inmediato futuro, con objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente.
Las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa bienes y servicios enunciados en inciso anterior.”*

Por su parte, dicho Decreto adicionó los incisos del párrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el siguiente sentido:

“Artículo 8. Adiciónese los siguientes incisos al párrafo del artículo 40 Ley 80 de 1993,



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

Adición y modificación de contratos estatales. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación la situación emergencia con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación emergencia.

Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia de Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y durante el término que dicho estado esté vigente.”

Frente a la Urgencia Manifiesta, el Consejo de Estado ha sido claro en expresar que se permite la suscripción de contratos mediante contratación directa encaminados a superar la crisis, tal como se observa en Sentencia del 28 de junio de 2019, Consejero ponente Dr. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicado 11001-03-26-000-2012-00002-00:

“(…) Lo primero que debe indicarse, es que el ejercicio del control fiscal es una función constitucional asignada a la Contraloría General de la República por mandato expreso del artículo 267 Superior, que la define como la vigilancia de la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, la cual se efectúa en forma posterior y selectiva de acuerdo con los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.

Dicha función no es ajena al mecanismo excepcional de contratación previsto en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta, regulada en los artículos 41 a 43 de la Ley 80 de 1993, que permite la celebración de los contratos necesarios para superar situaciones de crisis, cuando en virtud de aquellas es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa².

Al respecto se resalta el contenido de los artículos 42 y 43, que en su tenor literal rezan:

“[...] ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos.

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.

PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. [...]”

“[...] ARTÍCULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, sentencia del 7 de febrero de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado nro. 11001032600020070005500.



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia. [...]

(Se destaca)

Acorde con las disposiciones transcritas, la urgencia manifiesta (i) debe ser declarada mediante acto administrativo motivado, (ii) contener las razones para acudir a este instrumento excepcional y hacer referencia a los contratos que se suscribirán, señalando su causa y finalidad.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que “[dada la mayor autonomía con que se dota a las autoridades administrativas, para afrontar situaciones de urgencia y excepción, la vigilancia sobre las actuaciones que se deriven de su declaratoria, deberá ejercerla el organismo de control de manera especial e inmediata, según lo establece el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. [...]]”.

En ese orden de análisis, la Sala encuentra que la competencia por parte de la autoridad encargada del control fiscal, en el marco de la declaratoria de la urgencia manifiesta, se circunscribe a hacer la correspondiente verificación jurídica, que a su vez habilita al mismo ente de control para ejercer las funciones a su cargo, así como las asignadas a la Procuraduría General de la Nación, las cuales detentan la vigilancia de la gestión contractual, según lo establece el Título VII de la Ley 80 de 1993, en particular los artículos 62 y 65 ibídem, que disponen:

[...]

ARTÍCULO 62. DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. *La Procuraduría General de la Nación y los demás agentes del ministerio público, de oficio o a petición de cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.”*

“ARTÍCULO 65. DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN CONTROL FISCAL. *La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales. (...)*

[...]” (Negrita de la Sala)

Así las cosas, la interpretación armónica de las disposiciones del Estatuto de Contratación, permiten afirmar que el pronunciamiento que haga el organismo de control fiscal en virtud de lo señalado por el artículo 43 ejusdem, no constituye una decisión de fondo sino que se trata de un acto de trámite, puesto que a partir de los hallazgos que advierta, pueden o no derivarse el inicio de las investigaciones de orden fiscal o disciplinario”.

Bajo la anterior perspectiva de orden legal frente al caso puesto a examen, encontramos que la primera autoridad del municipio de Candelaria, decretó la calamidad pública y urgencia manifiesta en los términos del artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, y artículos 41 y 42 de la Ley 80 de 1993, procedió a contratar directamente la prestación de servicios para realizar actividades de preparación, contención y mitigación de la propagación del virus covid-19 en la zona urbana y rural. Así las cosas procedemos a evaluar la contratación suscrita así:

- Contrato No. 203-13-11-001 de 2020, por medio del cual se deberá prestar servicios de perifoneo y publicidad móvil, para informar de manera masiva a la comunidad de candelaria valle, en el marco de la urgencia manifiesta, por la pandemia Covid - 19, revisado éste contrato se logra evidenciar la coherencia con la mitigación del riesgo al conocer los síntomas y cuidados que se debe tener frente a la pandemia del COVID-19.



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

En el plan de acción específico, refleja un valor a ejecutar sobre dicho objeto por \$65.000.000, sin embargo el contrato suscrito tiene un valor total de \$25.000.000, encontrándose por debajo de lo presupuestado, cubriendo la totalidad de espacios rurales y urbanos.

En cuanto a la idoneidad del contratista no fue posible verificarla puesto que no reposa documento a evaluar en los archivos recibidos.

- De acuerdo a los contratos No. 203-13-11-002 de 2020 y No. 203-13-11-013 de 2020, los cuales tienen por objeto el suministro de insumos de asepsia para el personal de apoyo, organismos de socorro, fuerzas de seguridad y demás personal de la administración municipal, con ocasión de la urgencia manifiesta, decretada para conjurar la crisis por el contagio del coronavirus-covid-19, con el mismo contratista. Sin embargo, no se puede realizar un análisis más profundo de la situación al no existir copia íntegra de los contratos en mención, remitidos por el Municipio.

No obstante, se puede verificar que la necesidad determinada en el plan de acción específico y detallada en el objeto contractual es coherente con la situación que dio lugar a la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta.

En cuanto a la idoneidad del contratista no fue posible verificarla puesto que no reposa documento a evaluar en los archivos recibidos.

- De acuerdo a los contratos N° 203-13-11-003 de 2020; Contrato N° 203-13-11-005 de 2020; Contrato N° 203-13-11-010 de 2020; Contrato N° 203-13-11-011 de 2020; Contrato N° 203-13-11-012 de 2020, los cuales tienen por objeto la prestación de servicio para el suministro de ayudas alimentarias (remesas) para la población de escasos recursos y trabajadores informales del municipio de candelaria valle en ocasión de la urgencia manifiesta por coronavirus COVID-19.

Sin embargo, no se puede realizar un análisis más profundo de la totalidad de contratos con el mismo objeto al no existir copia íntegra de los expedientes contractuales en mención, por cuanto no fueron remitidos por el Municipio, sólo fueron recibidas las minutas contractuales.

No obstante, se puede verificar que la necesidad determinada en el plan de acción específico y detallada en el objeto contractual es coherente con la situación que dio lugar a la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta.

En cuanto a la idoneidad del contratista no fue posible verificarla puesto que no reposa documento a evaluar en los archivos recibidos.

- Contrato N° 203-13-11-004 de 2020, cuyo objeto contractual es la prestación de servicios de alimentación para atender a los organismos de socorro, fuerzas de seguridad y demás personal de la administración municipal con ocasión de la urgencia manifiesta, decretada para conjurar la crisis por el contagio del coronavirus COVID 19, sobre el particular se puede evidenciar que es coherente a la declaratoria de urgencia manifiesta decretada por el Municipio.

No obstante se recomienda al GRI N°2 verificar la idoneidad del contratista, así como los valores suscritos y ejecutados, teniendo en cuenta que no fue posible un análisis profundo sobre los mismos, al sólo remitir la minuta contractual.

- Contrato N° 203-13-11-006 de 2020, el cual tiene por objeto la prestación de servicios de limpieza y desinfección de las instalaciones sedes administrativas de la alcaldía municipal y áreas públicas del municipio de candelaria en el marco de la urgencia manifiesta por la pandemia COVID 19, por lo que se evidencia las actividades propuestas en el acta del consejo



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

Municipal de Gestión del Riesgo, plasmadas posteriormente en el Plan de acción, cuyo presupuesto y plazo se enmarca dentro del mismo.

Le corresponderá al GRI N°2, verificar la idoneidad del contratista y valores contratados puesto que no fue posible verificarlos debido a que no reposa documento a evaluar en los archivos recibidos.

- Contrato No. 203-13-11-007 de 2020, cuyo objeto es la prestación de servicios para el diseño, elaboración y entrega de piezas comunicativas e informativas para la comunidad en el marco de la urgencia manifiesta por la pandemia coronavirus COVID-19, revisado éste contrato se logra evidenciar la coherencia con la mitigación del riesgo al conocer los síntomas y cuidados que se debe tener frente a la pandemia del COVID-19.

En el plan de acción específico, refleja un valor a ejecutar sobre dicho objeto por \$65.000.000, sin embargo el contrato suscrito tiene un valor total de \$40.000.000, encontrándose junto con el Contrato No. 203-13-11-001 de 2020, cubriendo la totalidad de valor presupuestado.

Sin embargo, le corresponderá al GRI N°2, verificar la idoneidad del contratista y valores contratados puesto que no fue posible verificarlos debido a que no reposa documento a evaluar en los archivos recibidos.

- Contrato N° 203-13-11-008 de 2020, el cual tiene por objeto la prestación de servicios de transporte para distribuir las ayudas alimentarias y otros elementos en todo el municipio de candelaria en el marco de la urgencia manifiesta por la pandemia COVID 19. En el cual se observa justificación del objeto contractual y coherencia con el plan de acción elaborado por el municipio. En consecuencia se considera coherente con los hechos que dieron lugar a la declaratoria de calamidad pública decretada por el Municipio

Le corresponderá al GRI N°2, verificar la idoneidad del contratista y valores contratados puesto que no fue posible verificarlos debido a que no reposa documento a evaluar en los archivos recibidos.

- Finalmente mediante el contrato N°. 203-13-11-009 el arrendador concede al arrendatario el uso y goce del inmueble ubicado en la carrera 7 N° 10-29 10-31, jurisdicción del municipio candelaria valle, para centro de hospitalización y tratamiento de personas contagiadas del coronavirus (covid-19) del municipio de candelaria en el marco de la urgencia manifiesta, por la pandemia COVID-19.

Verificado el Plan de acción es coherente con el presupuesto asignado y se considera viable de acuerdo a la situación vivida en razón a la pandemia por COVID-19

En cuanto a la idoneidad del contratista no fue posible verificarla puesto que no reposa documento a evaluar en los archivos recibidos.

Se tiene que el objeto contractual comprende plenamente la justificación para remediar la calamidad pública decretada, y planeada según consta en acta 05 del CGMRD del 25 de marzo de 2020 y el plan de acción aportado, en tanto que se puede evidenciar, que la necesidad que dio lugar a tales contratos es reciente y comporta características de inmediatez, como lo presupone el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que tiene por objeto aunar esfuerzos económicos con el fin de garantizar la compra de elementos de protección requeridos para la atención de pacientes con covid-19 en el municipio de Candelaria,



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

Así las cosas, se tiene que la situación planteada por el burgomaestre del municipio, se enmarca dentro de los objetivos de la norma que contempla la figura de la Urgencia Manifiesta, para obviar procedimientos de selección de contratista y poder utilizar la figura excepcional de la Urgencia manifiesta para la selección de los mismo, debido a la inmediatez de la contratación requerida y lograr satisfacer las necesidades en tiempo real.

Teniendo en cuenta que todas las modalidades de selección contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública deben ser gestionadas, tramitadas y adelantadas a través de la Plataforma SECOP; y si bien es cierto que la causal de contratación de urgencia manifiesta faculta la simplificación de determinados trámites precontractuales, no restringe la aplicación de los principios de transparencia y publicidad que deben estar contenidos en todas las contrataciones públicas. Así las cosas, evidenciamos la publicación en el SECOP de los actos administrativos y contratos suscritos con ocasión de la declaratoria de urgencia manifiesta. De otra parte, en virtud del principio de transparencia contenido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 los procesos contractuales se establecieron con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes y servicios prestados idoneidad de los contratistas, pago de seguridad social, antecedentes, cotizaciones y demás documentos exigidos por normativas que reglan los contratos de acuerdo a su tipicidad.

De forma general se puede concluir que la justificación de la contratación se encuentra determinada en el plan de acción realizado y presentado, determinando la razón por las cuales el contrato permiten afrontar la calamidad publica o la declaratoria de la urgencia, igualmente se encuentra focalizada la población a intervenir (de forma general), se cumple con los principios de la contratación pese a que la ley le establece que se puede hacer la contratación sin necesidad de la elaboración de los estudios previos, la entidad como minimo debe tener claro el producto o servicio a adquirir –objeto, especificaciones técnicas, plazo, precio y cantidad, lo anterior se encuentra detallado en las minutas contractuales objeto del presente estudio.

Resulta así preciso recordarle a la primera autoridad del municipio, que si bien la contratación directa permite prescindir del procedimiento formal de las otras modalidades de selección, con todas las etapas y requisitos que ella exige, tal circunstancia no exime al administrador público del deber de efectuar una selección objetiva del contratista y de respetar los principios que regulan la contratación estatal como son los de transparencia, economía y responsabilidad, al lado de los principios de planeación, libre concurrencia, buena fe, y en general aquellos que rigen el ejercicio de la función administrativa.

Por consiguiente, obrando dentro del término legal contemplado en la ley se emite este concepto sin perjuicio de las acciones y resultados que produzca el ejercicio directo de control fiscal que se llegue a realizar por los funcionarios o autoridades en el marco de sus competencias.

Teniendo en cuenta que el grupo de trabajo 2 estará dirigido a ejercer el control y seguimiento a la contratación efectuada como consecuencia de la declaratoria de urgencia manifiesta y/o calamidad pública efectuada por los sujetos de control, teniendo la facultad de poder solicitar todos los documentos soportes de la contratación y hacer la respectiva visita fiscal.

Por lo cual considera este Despacho, se hace necesario que esta contratación se traslade al GRUPO DE REACCION INMEDIATA (GRI) EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS CON RELACION AL COVID 19, conformado mediante Resolución N°006 de abril 16 de 2020 para que haga una auditoria en la verificación de la ejecución de estos contratos, pese a dársele concepto favorable al pronunciamiento de urgencia, con la finalidad de hacer un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados a cada proceso de contratación, adicional a lo anterior efectuar un seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendadas al contratista, en el marco de la emergencia.

Resulta así preciso recordarle a la primera autoridad municipal de Candelaria – Valle del Cauca, que si bien la contratación directa permite prescindir del procedimiento formal de la licitación pública, con todas las etapas y requisitos que ella exige, tal circunstancia no exime al administrador público del deber de efectuar una selección objetiva del contratista y de respetar los principios que regulan la contratación estatal como son los de transparencia, economía y responsabilidad, al lado de los principios de planeación, libre concurrencia, buena fe, y en general aquellos que rigen el ejercicio de la función administrativa.



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°034-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA
MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
(18 DE JUNIO DE 2020)**

Por consiguiente, obrando dentro del término legal contemplado en la ley se emite este concepto sin perjuicio de las acciones y resultados que produzca el ejercicio directo de control fiscal que se llegue a realizar por los funcionarios o autoridades en el marco de sus competencias.

V. CONCEPTO

Con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de este documento, por satisfacer los presupuestos que para la declaratoria de Calamidad y Urgencia Manifiesta que exige la Ley 80 de 1993, Ley 1523 de 2012 y la Ley 1150 de 2007 respectivamente, en razón a la circunstancia que presidieron su declaratoria y la celebración e iniciación de los contratos fruto de tal declaratoria, este organismo de control con fundamento en el Art. 43 de la Ley 80 de 1993 emite el siguiente concepto:


PRIMERO: Concepto **FAVORABLE** en la utilización de esta figura excepcional que motivó el acto administrativo mediante el cual fue declarada la Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta, respecto de los hechos y circunstancias que determinaron la declaración y de los contratos suscritos; por cuanto se ajustan a los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo expuesto en los considerandos. Sin embargo frente a los contratos se deberá tener en cuenta las observaciones manifestadas en las consideraciones del despacho.

SEGUNDO: En cumplimiento a lo consignado en la parte considerativa de este pronunciamiento, se debe **ENVIAR** la contratación realizada en el marco de la presente Calamidad y Urgencia Manifiesta, al Grupo dos de trabajo de Reacción Inmediata de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca (GRI), conformado mediante la Resolución Reglamentaria N°006 del 16 de abril de 2020, para lo de su competencia.

TERCERO: El anterior concepto se emite sin perjuicio a que esta Contraloría en el ejercicio del control fiscal constitucional, pueda ejercer vigilancia a través de los respectivos funcionarios, en ejercicio del Control Posterior a los contratos objeto de este estudio y los que se lleguen a suscribir, en la línea de legalidad y gestión, que complementa el procedimiento de vigilancia fiscal, tal como lo precisó el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de marzo 24 de 1995, Rad.677, Consejero Ponente Luis Camilo Osorio.



LEONOR ABADIA BENITEZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca



Claudia Johana Luna Giraldo

LEONOR ABADIA BENITEZ
Contralor Departamental del Valle del Cauca

CLAUDIA JOHANA LUNA GIRALDO
Jefe Oficina Jurídica

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Daniela Blandón Prado	Técnico Operativo	
Revisó	Claudia Luna Giraldo	Jefe Oficina Jurídica	
Aprobó	Leonor Abadia Benitez	Contralora Departamental del Valle del Cauca	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			